Foro de desarrollo económico local

Carlos Portocarrero, Edmundo Garafulli,
Lourdes Montero, Rudy Cuellar,
Jorge Bohórquez

Donald Mercado Suárez, Vladimir Sanchez, Eberhard Gol
Marcelo Collao, Noel Rojas, Percy Bacarreza,
Marcelo Orgaz, Jorge Treviño, Teofilo Martínez

Santa Cruz de la Sierra, 9 de diciembre de 200-
Foro de Desarrollo Económico Local

Carlos Portocarrero
Edmundo Garafulic
Lourdes Montero
Rudy Cuellar
Jorge Bohórquez

Donald Mercado Suárez
Vladimir Sanchez
Eberhard Goll
Marcelo Collao
Noel Rojas
Percy Bacarreza
Marcelo Orgaz
Jorge Treviño
Teofilo Martínez

EXPO - BOLIVIA MUNICIPAL 2005
CARLOS PORTOCARRERO: Vamos a dar inicio a este foro de desarrollo económico local, que se realiza en el marco de la Expo Bolivia Municipal 2005.

Quisiera agradecer anticipadamente las contribuciones que harán a este Foro los panelistas Edmundo Garafulic, Lourdes Montero, Jorge Bohórquez y Ruddy Cuellar.

Lourdes Montero fue Viceministra de Microempresa del Ministerio de Desarrollo Económico y es experta en desarrollo económico. Jorge Bohórquez es el coordinador de la Unidad de Promoción de la Competitividad del Ministerio de Desarrollo Económico. Ruddy Cuellar trabaja en el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), que desde hace mucho tiempo estudia la descentralización y promueve el desarrollo económico local de algunos municipios de Santa Cruz.

Deseo agradecer muy especialmente a Edmundo Garafulic, del Proyecto de Promoción al Desarrollo Económico Rural (PADER-COSUDE), que desde el principio sumó su apoyo a la organización de este Foro, convocando a los panelistas, organizando la metodología y ayudándonos a invitar a este evento a varios alcaldes de diferentes distritos del país. No cabe duda que sin el apoyo de Edmundo, una parte importante de este evento no hubiera sido posible.

En nombre del Ministerio de Participación Popular, agradezco la presencia de todos ustedes y, sin más mediación, cedo la palabra a Edmundo Garafulic.
EDMUNDO GARAFULIC (PADE-COSUDE):
Muchas gracias, señor Viceministro.

Deseo presentar, como tema de discusión para este foro, las lecciones aprendidas y las recomendaciones que arroja la práctica de la promoción del desarrollo económico local en nuestro país.

Estas lecciones y recomendaciones fueron recogidas por el II Foro Municipal para el Desarrollo Económico Local, que se realizó en La Paz, en octubre pasado.

A ese II Foro acudieron alcaldes y miembros de varios gobiernos municipales, representantes de los ministerios interesados en el tema y personeros de las instituciones que promueven el desarrollo económico local en todo el país.

Una de las características más gratas de este II Foro fue la voluntad, tácita, de los participantes dando mayor énfasis a las potencialidades y desafíos del desarrollo económico local, que a sus problemas y dificultades.

Más de 400 participantes se congregaron en torno a mesas de trabajo para intercambiar experiencias y hacer un balance de la situación. Tomaron como eje central de sus reflexiones, los desafíos que plantea el recientemente culminado Diálogo Nacional Bolivia Productiva que, de hecho, fue una concertación público-privada que tuvo lugar en todos los municipios del país.

Voy a resumir las principales conclusiones de las mesas de trabajo, que compararon sus experiencias con las políticas públicas vigentes. Expusieron, desde su visión local, los problemas que enfrenta el país para promover el desarrollo económico. Luego, enumeraron los desafíos que la sociedad civil y los gobiernos locales encuentran cuando se proponen promover un desarrollo económico y las necesidades que tienen los actores locales para poder enfrentar esos desafíos y aprovechar las oportunidades.
Los participantes al II Foro tuvieron la oportunidad de escuchar los análisis de George Gray Molina y Gonzalo Chávez sobre el patrón de desarrollo económico vigente en el país. Estas exposiciones indicaron que el patrón de acumulación de capital basado en la exportación de materias primas ha creado una economía de enclaves que no generan suficiente empleo para disminuir la pobreza a mediano plazo.

Así, se ha construido una economía de base estrecha, en la que los actores grandes no se articulan con los medianos, ni con chicos. Por ello, nuestra economía muestra hoy una desarticulación estructural, que es uno de los orígenes de la inequidad prevaleciente.

Por su parte, los actores económicos privados pequeños, que actúan desde lo local, muestran mucho dinamismo y generan iniciativas y propuestas muy promisorias para el futuro. Ellos están aprovechando, en la medida de sus posibilidades, las múltiples oportunidades que actualmente ofrece el mercado de exportación y los mercados fronterizos, para una industria manufacturera que utilice las habilidades de nuestra mano de obra y agregue valor a nuestros recursos naturales.

También es alentadora la rapidez con la que la población boliviana se va apropiando de las Tecnologías de Información y Comunicación, TIC. A este aumento de la capacidad de comunicación de la sociedad civil, los gobiernos, en sus tres niveles, responden con voluntad para avanzar hacia un gobierno electrónico, que previene la corrupción y aumenta la transparencia de los actos gubernamentales.

Los actores económicos privados pequeños también van cambiando su actitud hacia el Estado y están pasando de una práctica de demandas permanentes, a una lógica de propuestas de estrategias productivas, con visión de mercado.
Aunque los líderes políticos, gremiales y regionales siguen enfrascados en utilizar el capital social de la población para organizar las demandas de la pobreza y no para promover propuestas ni iniciativas productivas, se percibe también una creciente tendencia a canalizar el capital social para acelerar procesos de desarrollo económico para crear riqueza.

Esta tendencia se hace patente en muchas agrupaciones sociales de toda naturaleza que existen en el ámbito local, y que conforman redes con una enorme energía capaz de desatar procesos. Esa orientación del capital social es indispensable para implementar un modelo de desarrollo, puesto que sin él, los recursos financieros y tecnológicos se tornan inoperantes.

Los gobiernos municipales también están asumiendo un rol más protagónico en la promoción del desarrollo económico de sus localidades. Para ello establecen espacios de concertación público-privada y se comprometen a cumplir Agendas de Responsabilidad Compartida -ARCO. Se han identificado más de 70 municipios en los que se desarrollan procesos de promoción al desarrollo económico local, que se orientan mediante la concertación entre actores públicos, privados y otros actores institucionales.

Entre los actores políticos de todos los partidos se está desarrollando también una creciente voluntad de construir un Estado que no sólo regule sino que también intervenga para promover la competitividad de la economía y de los actores económicos privados, pequeños y medianos, para ir construyendo una economía de base ancha.

Los actores políticos que han asumido el poder central en los últimos años han generado algunas políticas públicas que alientan el espíritu emprendedor y proponen incentivos a iniciativas en ámbitos locales, como por
ejemplo, la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural (ENDAR), que tiene como principal dominio de intervención el desarrollo económico local. Es muy probable que dicha tendencia se fortalezca en el futuro.

También algunos actores económicos grandes, ya perciben la necesidad social de avanzar hacia una economía de base ancha y de construir alianzas estratégicas con los pequeños y medianos, para aprovechar y compartir equitativamente las oportunidades que ofrece el mercado de exportación.

Con el decreto del Compro Boliviano, el gobierno central ha dado una señal de la voluntad que existe para promover la redistribución de mercados para ampliar la base social de la economía aunque quedan todavía trabas en su implementación.

Todas estas tendencias permiten vislumbrar la emergencia de un nuevo modelo de desarrollo en Bolivia. Éste enfrenta todavía muchos problemas, pero ya se percibe que actuará principalmente desde lo local, es decir, desde los municipios.

Esa es la transición histórica que estamos viviendo, y en ella, el desarrollo económico local adquiere absoluta relevancia porque propone emprender las estrategias de desarrollo desde la sociedad civil, como una iniciativa conjunta de los productores con su gobierno municipal.

A pesar de estas tendencias prometedoras, las mesas no dejaron de identificar algunas otras, más preocupantes. Entre ellas figura, en primer lugar, la incoherencia de las políticas y de las normativas gubernamentales que paralizan al Estado y le impiden orientar con rumbo consistente políticas de desarrollo económico y social.
Entre esas incoherencias normativas, las mesas lamentaron, una vez más, que los actores económicos locales no participen en el proceso de planificación participativa, que distribuye los recursos municipales. Esa ausencia impide a los productores alentar a los Gobiernos municipales a asignar recursos para promover el desarrollo económico de sus localidades.

De ahí que la asignación de recursos se ordene por criterios territoriales y demográficos, que orientan la inversión pública hacia el equipamiento social y la dotación de infraestructuras que apoyan una producción sin visión empresarial; mientras que la producción con perspectivas de mercado, y que además genera empleo, recibe comparativamente pocos recursos del Gobierno municipal.

Las mesas consideraron preocupante la debilidad de la seguridad jurídica, entendida como la existencia de normas claras que deban ser cumplidas por instituciones sólidas, sujetas a una tutela judicial efectiva.

Las mesas también expresaron su preocupación por los graves problemas de competitividad y productividad que tiene el país. Señalaron que las acciones de los servicios financieros y no financieros –que precisamente deben apoyar a los productores a aumentar su competitividad– son insuficientes y no llegan a los municipios rurales porque están excesivamente centralizados. Además, observaron que la asistencia técnica no está todavía articulada con los servicios financieros.

Sin embargo, consideraron alentador que estos servicios tiendan progresivamente a responder a la demanda de los productores y hayan abandonado la práctica de ofrecer verticalmente paquetes tecnológicos rígidos.
En cambio, observaron la insuficiente vinculación entre los Acuerdos Bolivianos de Competitividad (ABC) y las Agendas de Responsabilidad Compartida (ARCO), definidos en los procesos de concertación pública-privada en los municipios.

También constataron que las prefecturas cumplen un papel muy modesto, que no guarda proporción con sus capacidades en los procesos de desarrollo económico local.

Lamentaron además que algunas mancomunidades de municipios no hayan logrado convertirse en instrumentos que impulsen el desarrollo económico local, aunque también identificaron otras que están logrando convertir sus visiones de desarrollo en estrategias operativas.

Sin embargo, también consideraron que tanto las mancomunidades como las prefecturas tendrán una nueva oportunidad de promover el desarrollo económico local, cuando les llegue el momento de desempeñar un rol importante en la construcción de las autonomías.

Todas las anteriores consideraciones orientaron la reflexión colectiva de las mesas del II Foro Municipal para el Desarrollo Económico Local y las llevaron a identificar los principales desafíos ante los que se encuentra el país, y particularmente los municipios.

El principal desafío radica en cambiar el patrón de desarrollo con una decidida intervención del Estado en la economía para desarrollar una economía de base ancha, aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado de exportación, agregando valor a nuestras materias primas.

Lograr esto significa mucho más que conseguir efectos sobre la economía, significa aumentar la capacidad

Debilidades de las prefecturas y de las mancomunidades, y oportunidades de la descentralización.

Principales desafíos del país en general y de los municipios en particular.

Cambiar el patrón de desarrollo a través de un aumento de la intervención del Estado.
de generar dignidad para miles de ciudadanos que hoy son el motor de la economía boliviana y que en este mismo momento están cambiando la estructura social boliviana.

Las mesas coincidieron con que la política social no resuelve todo el problema de la miseria y que es necesaria una política económica cuyo centro debería ser la búsqueda de la competitividad de las economías locales para que los emprendimientos logren generar empleo.

Sin embargo coincidieron también con la importancia de la inversión social en educación y salud para aumentar la productividad de los bolivianos. Concluyeron que no debe existir contradicción entre políticas económicas y sociales, ya que ambas se complementan, y que la mejor política social es la que contribuye a generar capacidad de empleo.

Un desarrollo que continúe reproduciendo la inequidad y la exclusión, no será sostenible y defraudará a la población que proyecta sus esperanzas en el desarrollo económico local para mejorar sus condiciones de vida.

En resumen, el gran desafío consiste en lograr un desarrollo con participación, equidad y sostenibilidad económica, político-social y medioambiental.

Para enfrentar con perspectivas de éxito estos grandes desafíos, las mesas del II Foro recomendaron un conjunto de medidas pragmáticas y enérgicas, que:

- Superen la actual incoherencia del sistema normativo y legislativo que impide la formulación de políticas públicas congruentes.
- Articulen, en un verdadero sistema, los tres niveles administrativos y políticos del país, en torno a una visión compartida del desarrollo, para lograr una articulación estratégica entre ellos.
• Conviertan a las prefecturas y mancomunidades de municipios en agentes efectivos de la promoción económica, aprovechando para ello el proceso de descentralización que está por iniciarse.

• Generen alianzas estratégicas entre pequeños y grandes productores, de modo que juntos puedan acceder a mercados que demandan escalas de producción superiores a las que pueden desarrollar los pequeños productores aislados.

• Adaptén con precisión la oferta pública y privada de servicios financieros y no financieros a los requerimientos de los actores económicos privados, para ayudarlos efectivamente a insertarse competitivamente en los mercados.

• Apliquen los mecanismos que fueron diseñados, en términos generales, por la Ley del Diálogo aprobada en julio de 2001, para favorecer la participación de los agentes económicos privados en los procesos de planificación municipal.

• Vinculen efectivamente los Acuerdos Bolivianos de Competitividad de las cadenas nacionales y exportadoras con las Estrategias Productivas Integrales de los municipios, cuyo primer esbozo tiene su origen en el Diálogo Nacional Bolivia Productiva.

En este afán de identificar las medidas que deben tomarse para enfrentarlos con posibilidades de éxito, el II Foro identificó también algunas políticas públicas que avanzan en la dirección correcta, porque ofrecen importantes oportunidades para el desarrollo económico local. Entre éstas, es importante destacar las siguientes:
• El DS No. 28153 que declara política nacional a la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural (ENDAR). Esta importante estrategia adopta el desarrollo económico local como su principal dominio de intervención y otorga gran importancia a las estrategias locales que surjan de la concertación público-privada, puesto que éstas serán la principal referencia para orientar la inversión pública.

• El DS del Compró Boliviano, que abre el mercado de las compras estatales a los productores nacionales y facilita el ingreso de los pequeños y micro empresarios a las licitaciones públicas.

• El DS No. 28421, que regula el uso del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y asigna recursos a prefecturas y municipios para promover el desarrollo económico local y generar empleo.

También el entorno ofrece interesantes oportunidades. Por ejemplo, los productos que podría producir Bolivia tienen pujantes mercados en el exterior.

Otra oportunidad importante es la que se abre con las nuevas tecnologías de información y comunicación. Ya mencioné la rapidez con la que la población boliviana se va apropiando del Internet.

Me he permitido ofrecerles una síntesis muy apretada de la reflexión colectiva que tuvo lugar durante el II Foro Municipal para el Desarrollo Económico Local. Ustedes habrán podido constatar que los participantes alcanzaron un alto nivel de coherencia y profundidad en sus diagnósticos y propuestas.

Me parece que tal coherencia y capacidad propositiva en una reflexión colectiva es un signo inequívoco de que
en el país se está forjando una nueva democracia que cristaliza la voluntad, también colectiva, de avanzar hacia la integración y la equidad.

El patrón de desarrollo económico que esa democracia aspira construir no podrá tener otros actores principales que no sean los productores de bienes y servicios, pequeños, medianos y grandes, que actúan en nuestros municipios, tanto en los más remotos como en los que se hallan sobre el eje central.

La promoción al desarrollo económico local, al poner énfasis en la construcción del poder local, ofrece a estos actores el instrumento idóneo para que atraigan los poderes públicos hacia ellos y los conduzcan a concertar alianzas. Quizás, a través de esas alianzas, se irá construyendo el nuevo Estado boliviano, solidario, participativo, eficiente y descentralizado.

Aparentemente, las perspectivas son alentadoras y tenemos al alcance de la mano los medios y conocimientos para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades.

¿Lo tenemos todo? ¿Qué nos falta? Estamos aquí para responder estas dos preguntas.

LOURDES MONTERO: Muy buenas tardes, antes de nada quiero decirles que yo no creo que lo tengamos todo. Pareciera que estamos frente a una serie de oportunidades, que no sabemos o no podemos aprovechar.

Las conclusiones de las mesas del II Foro Municipal para el Desarrollo Económico Local no hacen más que repetir lo que desde más de diez años venimos diciendo, y no presentan propuestas creativas que se adecuen a la realidad económica.

Reclamar competitividad y productividad no es una novedad. También sabemos que el patrón monoexportador
no establece conexiones estructurales entre pequeños y grandes productores. No podemos esperar que lo haga, pues genera economías de enclave y eso lo conocemos, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo.

Ya hemos estudiado hasta la saciedad los problemas de la seguridad jurídica. También conocemos los problemas de los servicios financieros y no financieros.

La ausencia de los actores económicos locales en los procesos de planificación municipal la venimos lamentando desde la creación de la Ley de Participación Popular y, sobre todo, lamentamos la debilidad estructural que tiene el Estado para apoyar la producción.

Mientras tanto, en Bolivia se ha generado una dinámica y creciente economía popular paralela, que permanece invisible a las políticas públicas aunque genera el 90 por ciento del empleo y que no sólo responde a las necesidades básicas del mercado interno, sino que mantiene una sostenida relación comercial de exportación con los países fronterizos.

Un reciente estudio ha determinado que sólo en la frontera con Argentina se mueven alrededor de cuatro millones de dólares mensuales. Se puede llamar contrabando a esa actividad, pero cualquiera que sea su denominación, ha desarrollado un tejido industrial para productos no tradicionales, compuesto por una diversidad de formas de producción que si bien actualmente no tienen la capacidad de competir con calidad, son muy eficientes en precio. Además, no dependen, como nuestras grandes industrias, de subvenciones o preferencias arancelarias.

Hoy es muy difícil esperar una articulación estructural entre los grandes actores económicos de las cadenas exportadoras tradicionales y los pequeños. Más bien yo quisiera que tengamos un poco de creatividad en
nuestra visión y pensemos que la diversidad de estrategias productivas es una virtud y no un defecto que impide el desarrollo.

El II Foro Municipal para el Desarrollo Económico Local espera que en la transición histórica que estamos viviendo, y supongo que esa transición es la de un modelo neoliberal ortodoxo hacia una mayor intervención estatal en la dinámica económica, el Estado escuche a los productores. Yo creo que ellos ya están cansados de plantear al Estado propuestas consensuadas y maduras.

El problema no consiste en seguir escuchando sino dejar nuestra sordera de lado e iniciar realmente procesos de acción pública. El Diálogo Nacional Bolivia Productiva ha invertido dos años y dos millones de dólares, pero el Gobierno nacional y los Gobiernos regionales y locales se han apropiado muy poco de los resultados de este proceso.

Se sostiene que un nuevo modelo de desarrollo está surgiendo en Bolivia y que ese desarrollo se definirá por su apoyo a lo local. Yo agregaría una frase de un reconocido economista mundial que sostiene que debemos pensar globalmente para actuar localmente.

Es poco probable que un municipio, por más desarrollado y diverso que sea conciba su economía con una visión endógena. Y tiene razón porque los municipios deben incluir la asociatividad en sus visiones de desarrollo y buscar integrarse con otros, cuando existan posibilidades de complementariedad en sus espacios geográficos cercanos y también en los alejados y diversos.

Para definir su vocación, un municipio debe definir sus ventajas con relación a su entorno. Y su vocación no puede estar restringida a una visión exclusivamente productivista, sino que debe considerar la totalidad de la dinámica económica de la región. Por ejemplo, un
municipio podría tener una vocación de servicio a la producción de su entorno, o tener la capacidad de acoplar y comercializar los productos de toda una región. Es decir que debe pensar en todo el circuito productivo, para especializarse en algunos procesos como, por ejemplo, la producción de materia prima, la transformación o la comercialización. Esas visiones buscarán la complementariedad de un municipio con otros, superando las fronteras municipales y de vecindad geográfica.

Una vez definida la vocación del municipio, el Gobierno municipal debe definir sus formas concretas de intervención. Allá podría crear un instituto tecnológico, aquí debería desarrollar estrategias para sus principales productos, a partir de inteligencias de mercados.

Sin embargo, soy menos optimista que Edmundo cuando dice que ciertos municipios y algunas mancomunidades están tornando sus visiones de desarrollo en estrategias operativas. Yo creo que las pocas experiencias que se han dado surgen más del acompañamiento de la cooperación internacional que de iniciativas autogestionarias. Los pocos ejemplos me hacen sostener que una golondrina no hace el verano y creo que una de las principales debilidades de las mancomunidades es que se asocian sin propósitos concretos.

Por eso, espero que las mancomunidades de municipios avancen hacia el desarrollo de procesos temáticos y que se propongan metas menos ambiciosas que las que se propusieron cuando se iniciaron.

Si bien debemos reconocer avances en los diálogos público-privados que arrojan Agendas de Responsabilidad Compartida, también debemos constatar que la implementación de esas agendas es lenta, insuficiente y poco operativa. No creo que el Estado, me refiero al ámbito
nacional y subnacional, se haya tornado permeable a las estrategias productivas de los actores económicos y que las asuma como propias.

¿De qué nuevo rol del Estado estamos hablando? ¿Dónde interviene en la economía productiva? La propuesta de Municipio Productivo es amplia, esperanzadora, pero no ha dejado de ser un discurso con buenas intenciones.

Los gobiernos municipales, antes de embarcarse en la promoción del desarrollo económico, están obligados a implementar proyectos aislados para responder a las demandas de sus grupos de poder local, y eso es lo que ha estado ocurriendo en la realidad.

Para finalizar, quisiera sólo apuntar algunos temas capitales de la agenda nacional para avanzar hacia una nueva forma de intervención estatal en la dinámica económica, que creo que es el tema que hoy nos une.

En primer lugar, debemos redefinir la transferencia de recursos públicos a privados, bajo un estricto control social que impida que se favorezcan sólo los grupos de poder que actúan en el nivel nacional o regional, como ya ha ocurrido en nuestra historia.

Luego, debemos redefinir el rol del Directorio Único de Fondos (DUF) porque su diseño institucional ha quedado obsoleto ya que sus principales inversiones continúan siendo dirigidas a la construcción de infraestructura. Tenemos municipios donde se han construido colegios que ya no tienen más niños, porque la gente ha migrado. Esos fondos, que concentran el 21 por ciento de la inversión estatal, deben tener un rol protagónico en el apoyo a la producción desde el poder central.

Por último, debemos revisar críticamente las políticas de crédito, que a nombre del desarrollo, captan recursos
Revisión de las normas de las entidades de crédito.

Duda sobre la utilidad de las cadenas productivas para la redistribución de la riqueza.

Duda sobre las bondades de la visión exportadora en las condiciones actuales que se imponen a la competitividad.

Avances del desarrollo económico local en los últimos años.

internacionales y que actualmente favorecen al comercio y a los servicios, porque aplican tasas que la producción no logra pagar.

Quisiera cerrar mi intervención con dos provocaciones. La primera propone dudar de que el modelo de cadenas productivas –que en muchos casos se presenta casi como una construcción ficticia– contribuya a una mejor distribución de la riqueza.

La segunda provocación consiste en poner en tela de juicio a la visión que fomenta las exportaciones con la hipótesis neoliberal de exportar o morir. Muchos países ya han comprobado que también se puede exportar y morir. En las espurias condiciones de la competencia global, la principal ventaja competitiva de algunos países es vender su mano de obra a precios ínfimos. Así, lo único que se logra es hipotecar el futuro del principal recurso natural del mundo. Es decir, del ser humano.

Ruddy Cuellar (CEPAD): Voy a iniciar mi presentación indicando que el desarrollo económico local ha existido siempre en nuestro pueblo y en nuestros municipios, pero de manera desarticulada, desordenada. Nuestros sectores productivos locales no estaban asociados. Cada productor, cada vendedor de servicios utilizaba sus habilidades de acuerdo a las capacidades que tenía, sin ningún apoyo. Tampoco existía una relación entre el sector público y el privado y el sector público no promovía al sector privado. Además, el modelo de planificación participativa municipal no incorporaba los temas de los sectores productivos. Aunque el actual modelo sigue siendo territorial, lo sectorial comienza a encontrar su lugar.

Por eso, no podemos decir que el desarrollo económico local nunca existió. Lo que sí podemos afirmar es que desde hace cinco años se viene incluyendo el
desarrollo económico local en las políticas públicas municipales, como la manifestación de una voluntad de los Gobiernos municipales.

Las oportunidades para el desarrollo económico existen, la inversión pública puede venir de diferentes fuentes. El Impuesto Directo a los Hidrocarburos es una de ellas. Además, como nos lo recordó Edmundo, tenemos una serie de decretos que generan oportunidades para el desarrollo local. Me refiero al Compro Boliviano, que hay que poner en práctica y hacerlo efectivo.

Yo quiero decirles que en Santa Cruz hay un fuerte avance del desarrollo económico local. Un estudio reciente indica que de los 56 municipios del departamento, aproximadamente 26 Gobiernos municipales realizan permanentemente actividades para promover el desarrollo económico de sus localidades. Para ello se han dotado de Unidades de Promoción Económica Municipal (UPEM) que están trabajando activamente.

Tenemos gobiernos municipales que ya han establecido una articulación entre el sector público y el sector privado. Para ello, han creado una Comisión de Desarrollo Económico Local (CODEL) o un Directorio Local de Promoción Económica (DILPE). Los Gobiernos municipales también se han dotado de Unidades de Promoción Económica Municipal (UPEM) o Agencias de Desarrollo Económico Local.

Los que de alguna manera estamos comprometidos con este proceso debemos esforzarnos para hacer funcionar esas unidades operativas y esos niveles políticos porque allí se irán creando las alianzas público-privadas. La institucionalidad ya está ahí. Tiene dificultades y aciertos, pero lo evidente es que el proceso de promoción al desarrollo económico local ya se ha iniciado en los municipios de Bolivia.
Los conflictos mezquinos entre algunas instituciones públicas frenan la promoción del desarrollo económico local.

Por eso, antes de generalizar de manera enfática, debiéramos hacer una evaluación muy concreta del aporte de las mancomunidades municipales a este proceso de promoción del desarrollo económico local y valorar ese aporte. También debiéramos valorar el aporte de las subprefecturas y de los consejos provinciales de participación popular, que durante muchos años no se quiso hacer funcionar y que ya están funcionando.

Tenemos también que hablar de las prefecturas departamentales, que van a tener que jugar un rol importantísimo en este proceso de promoción del desarrollo económico local cuando se instauren las autonomías.

Tenemos que dejar las mezquindades que ocurren en los niveles departamentales y en el nacional. Hemos visto a prefecturas que no querían hacerse cargo del desarrollo económico local. También hemos visto disputas entre el servicio de fortalecimiento municipal y la dirección de desarrollo productivo en torno a la decisión de quién debe asumir el rol de promover el desarrollo económico local del departamento.

También hay conflictos mezquinos en el nivel nacional, entre los ministerios de Agricultura, Ganadería y Asuntos Campesinos, de Participación Popular, de Desarrollo Económico...

Mientras esto ocurre, tenemos la posibilidad de fortalecer los Gobiernos municipales, alentando a los concejos a que se doten de una comisión para la promoción del desarrollo económico local. Los concejos tienen comisiones que se ocupan de la salud, de la educación, del mercado, pero aún no tienen una comisión de desarrollo económico local. Existen capitales de departamento donde esa comisión no existe aún.
Sobre esa base, los Gobiernos municipales podrán desarrollar un proceso que construya una visión compartida del desarrollo local, que busque armonizarse y coordinar para complementarse con las visiones de otros municipios.

Por eso, Edmundo, yo coincido en que es importante poner en funcionamiento lo que ya tenemos a disposición. Además, pronto tendremos autonomías departamentales, que van a iniciar su proceso de creación a partir de enero del próximo año.

Tenemos también que pensar en el desafío de la planificación y ejecución de las estrategias de desarrollo económico local. En estrategias no sólo deben incorporar las visiones de los sectores económicos, de los sectores productivos, sino también las visiones de los actores territoriales, de los comités de vigilancia, de las Organizaciones Territoriales de Base, de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos, de las juntas vecinales.

Si bien es cierto que en nuestra planificación participativa municipal –que da origen a los Programas Operativos Anuales y a los Planes de Desarrollo Municipal– prevalecen los proyectos concebidos con criterios territoriales, porque esa planificación se orienta por territorio y demografía y no incorpora a la base productiva, debemos velar para que también la estrategia de desarrollo económico beneficie a un gran número de personas y fortalezca territorios.

Es decir que no podemos limitarnos a elaborar planes de desarrollo municipal que sirvan a unos pocos productores grandes, que no dejan beneficio en el ámbito local y que tienen su residencia en alguna ciudad grande.

También debemos dinamizar el mercado para los emprendedores emergentes que satisfacen el consumo local. 
Por eso, ya no debe ocurrir que en algún foro sobre desarrollo, que congrega a trescientas o quinientas personas, ofrezca como refrigerio productos de industria brasileña, chilena, estadounidense. No tengo nada contra esas industrias ni esos países, pero si nos congregamos para pensar en el desarrollo del país, debemos establecer símbolos, debemos mostrar que consumimos lo que se produce en la región o en el lugar donde tiene lugar el evento.

En lo que se refiere a aprovechar oportunidades para el desarrollo económico local, pues tenemos que pensar en intercambiar primero nuestros propios consumidores locales. Por ejemplo, hoy se está desarrollando la fiesta de Coloca. Hay también fiestas patronales en los municipios de Concepción, La Guardia y Portachuelo. Seguramente, a alguna de estas ferias irá mucha gente de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pero a las ferias más pequeñas, irá la gente de los municipios cercanos para consumir lo que les ofrezcan sus anfitriones y dinamizar así esas economías.

También debemos promover el intercambio de consumo de productos y servicios en el ámbito regional. Este fin de semana, en Guarayos se realizará la feria de la piña y en Samaipata la feria de la miel. De paso les informo que ambas actividades se realizan sin apoyo de la cooperación internacional, son emprendimientos de los Gobiernos municipales y de los productores. Pero lo importante es que esos actores locales se están abriendo oportunidades para su propio desarrollo local. Sobre la base de esas iniciativas locales, debemos trabajar para ampliar el mercado local, departamental y nacional y, además buscar mercados externos para la producción local.

Para finalizar, quisiera expresar mi esperanza de que este evento y sus conclusiones contribuyan y acompañen de alguna manera estos procesos.
¿QUÉ ES EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL?

El Estado debe invertir sus recursos para ayudar a que los productores de bienes y servicios —grandes, pequeños, rurales y urbanos— se tornen más competitivos y logren generar empleo.

Para orientar sus inversiones, el Estado debe concertar con los productores porque ellos saben qué necesitan para aumentar su competitividad y qué alianzas deben hacer para fortalecer el tejido productivo de su entorno.

Este diálogo público-privado es el rasgo fundamental de los procesos de promoción del desarrollo económico local que no sólo favorecen a los productores individuales sino que desencadenan las potencialidades locales.

Sólo los productores competitivos en el mercado pueden generar empleo decente y duradero. Por su parte, el Estado puede hacer mucho para aumentar la competitividad. Puede, por ejemplo promulgar leyes y reglamentos que canalicen créditos oportunos y accesibles; invertir en la construcción de carreteras, obras de riego o en redes de distribución de energía; ofrecer asistencia técnica a los productores, crear incubadoras de empresas, disminuir los trámites para su formalización. La gama de posibilidades que tiene el Estado para promover la competitividad de las empresas es muy amplia.

¿DÓNDE DEBE INVERTIR EL ESTADO?

El Estado necesita saber dónde y en qué invertir para lograr mayor efecto. Los procesos de desarrollo económico local sirven precisamente para responder a esta interrogante.

Cuando el Estado orienta sus inversiones mediante una concertación con los actores económicos privados, logra dar eficacia y eficiencia a sus recursos porque los productores saben qué necesitan para
aumentar la competitividad de sus productos y servicios y, además, también están dispuestos a invertir.

Esta articulación es el rasgo fundamental de los procesos de promoción del desarrollo económico local. Por lo tanto, promover el desarrollo local significa promover la concertación entre todos los niveles e implementar los acuerdos a que se lleguen.

EN EL MUNICIPIO SE CONVERSA DE TÚ A TÚ

Aunque son varios los espacios donde puede ocurrir este diálogo, el ordenamiento administrativo del país hace que el municipio sea el ámbito donde el Estado y los actores económicos privados pueden entrar en relación más inmediata.

Varios gobiernos municipales ya están concertando con los actores económicos privados de sus localidades. Para ello han establecido espacios de concertación público-privada. En estos espacios, los productores y los gobiernos municipales elaboran una agenda de acciones conjuntas para favorecer la competitividad de los productos de la localidad.

Los espacios de concertación tienen además la virtud de poner en evidencia las potencialidades locales y permiten diseñar una estrategia en la que los privados establecen alianzas que fortalecen el tejido productivo del municipio.

NO SÓLO EN LOS MUNICIPIOS

Sin embargo, a menudo los intereses y procesos productivos trascienden las fronteras de un municipio y alcanzan varios departamentos, todo el país, o llegan hasta el exterior. Y es que estos procesos se asemejan a una cadena en la que cada eslabón representa a algún productor que realiza una acción que aumenta el valor del producto. Por ejemplo, en la cadena de valor de un producto agrícola, un eslabón está conformado por los productores y comercializadores de insumos, otro eslabón lo conforman los agricultores; mientras que los transformadores, transportistas, mayoristas y minoristas forman, cada uno, eslabones de esta cadena que lleva un bien desde
su etapa de producción primaria hasta el mercado final.

Por supuesto que la competitividad del producto dependerá del desempeño de cada uno de los eslabones. El Estado puede hacer mucho para mejorar ese desempeño.

Por eso, la promoción del desarrollo económico no se limita al ámbito municipal. Ya existen espacios de concertación público-privados en otros niveles. No otra cosa son los Consejos Departamentales de Competitividad y los Acuerdos Bolivianos de Competitividad. En esos ámbitos, el Gobierno central concierta con los actores de varias cadenas de valor que tienen un alcance nacional o que llegan a exportar.

LA COYUNTURA ACTUAL

El desarrollo económico local es el enfoque que está organizando las políticas públicas para el desarrollo del país.

El Diálogo Nacional Bolivia Productiva, es un ejemplo de política pública que se sostiene en procesos de desarrollo económico locales. En efecto, el Diálogo ha sido un vasto proceso educativo que ha generalizado la práctica de la concertación entre el Estado y los actores económicos privados. Hoy, todos los municipios del país han iniciado un proceso para definir los rubros económicos que consideran más promisorios en términos de mercado y sus gobiernos municipales y organizaciones de productores buscan ahora implementar estrategias integrales para promover esos productos.

El desafío que enfrenta ahora el gobierno central, los gobiernos municipales y las organizaciones de productores radica en perfeccionar esas estrategias para que la – quizás incipiente – concertación que promovió el Diálogo Nacional Bolivia Productiva tenga efectos concretos.

Otro ejemplo de política pública es la Estrategia Nacional para el
Desarrollo Agropecuario y Rural (ENDAR).

Esta estrategia, que ofrece recursos del Estado para dotar a los productores agropecuarios y rurales de los conocimientos y medios que necesitan para insertarse de manera sostenida y competitiva en los mercados, se orienta a través de los procesos de desarrollo económico local. Por ello concede gran importancia a las agendas público-privadas y estrategias productivas que sean concertadas en los municipios, departamentos o en los acuerdos bolivianos de competitividad.

El desafío de la ENDAR consiste en coordinar los esfuerzos del Estado y de la cooperación internacional, en torno a las propuestas productivas que surgen desde lo local.

MÁS PARTICIPACIÓN, MÁS CONTROL SOCIAL

Las diversas experiencias de desarrollo económico local que ocurren en todo el país han despertado las esperanzas de los productores, de los gobiernos locales, de las instituciones públicas y de la cooperación internacional. Todos estos actores se esfuerzan para lograr que las inversiones del Estado sean orientadas por la concertación público-privada. Es decir, por procesos de desarrollo económico que surjan desde lo local.]

La concertación entre el Estado y los actores económicos privados para orientar las políticas públicas de desarrollo, es el salto cualitativo que la democracia boliviana realizará en los próximos años. Cuando la sociedad civil se apropié de los nuevos mecanismos de participación que sostienen los procesos de desarrollo económico local, los ciudadanos ganarán influencia en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales de los gobiernos. Esta participación no sólo orientará mejor los recursos del Estado y los tornará más eficientes y eficaces, sino que fortalecerá el control social.
Jorge Bohorquez (Unidad de Productividad y Competitividad): Vengo en representación de la Unidad de Productividad y Competitividad del Ministerio de Desarrollo Económico, que es la Secretaría Técnica del Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad, que desde el 2001 pretende promover en el país la visión de productividad y competitividad.

Quiero mencionar que para la Unidad de Productividad y Competitividad es muy valioso el contacto con los Gobiernos municipales del país. Si bien es cierto que la política de productividad y competitividad del país ha sido definida de arriba hacia abajo, las iniciativas que se están dando en el ámbito local y regional se han tornado muy importantes. Por eso, la Unidad avanza hacia una visión que parte de abajo hacia arriba.

Ese es, precisamente el objetivo de mi presencia aquí. Quiero exponer las experiencias que se están dando en el tema de productividad y competitividad, para identificar oportunidades de vincular procesos. Comenzaré entonces haciendo una exposición general, para luego proponer acciones concretas, que vinculen procesos.

En los últimos años, pero principalmente a partir de 1990, se ha constatado que el crecimiento económico, calculado en términos de tasa promedio y per cápita del Producto Interno Bruto, es insuficiente para lograr resultados importantes en la lucha contra la pobreza.

Para remediar esa tendencia, nuestra estrategia de desarrollo debe buscar la generación de riqueza y la redistribución económica y social. Debemos generar empleo, ingresos y productividad. Pero para ello es necesario tender puentes entre los grandes empresarios y los micro, pequeños y medianos productores y construir así una economía de base ancha. Es decir que debemos
Construir una economía de base ancha que genere empleo fortalecer lo que algunos llaman la economía popular, vinculándola con los sectores más grandes y modernos.

El sector público debe adoptar una visión de responsabilidad compartida con el sector privado y crear alianzas estratégicas público-privadas. Esto último es muy importante, porque ya se están dando iniciativas en diferentes niveles en el país.

Por otro lado, quisiera referirme las tendencias y oportunidades actuales. Gracias a un escenario favorable en el entorno externo, se observa un incremento importante en las exportaciones del país, que en el año 2004 han alcanzado aproximadamente 2,2 miles de millones de dólares.

Este crecimiento cuantitativo ha sido acompañado por un importante cambio cualitativo. Me explico: anteriormente, los mil doscientos o mil quinientos millones de dólares que exportaba el país eran generados por cuatrocientas empresas. Hoy, son más de seiscientas. Ese es un cambio cualitativo importante, que es necesario conservar y fortalecer porque avanza hacia la economía de base ancha.

Sin embargo, también hay que reconocer que el aumento de los volúmenes de exportación se debe a algunos pocos productos. Aproximadamente, el 58 por ciento de nuestras exportaciones son hidrocarburos y productos mineros. Las oleaginosas representan el 19 por ciento y los productos agropecuarios y las manufacturas, 23 por ciento.

Por lo tanto, más que cambiar el modelo económico actual, es necesario cambiar su patrón de desarrollo o su patrón de acumulación. Esto quiere decir que debemos pasar de un patrón monoproducción de materias primas a otro que se sostenga en una producción diversificada y en la agregación de valor. Se trata, de hecho, de un cambio cualitativo.
Varias y diferentes iniciativas nacionales, regionales y locales están actuando en la dirección correcta y produciendo un cambio en el patrón de desarrollo.

Algunas de estas iniciativas tienen su origen en los esfuerzos para la promover el desarrollo económico local. Es decir en los esfuerzos que hacen los gobiernos municipales y el sector privado local para concertar los estímulos adecuados que lleven la vocación productiva de sus localidades desde lo potencial hacia lo efectivo.

Esta es una relación público-privada fructífera, que en la medida que tiene éxitos alienta otro cambio que es importante resaltar. Me refiero a ese cambio de actitud que transita de la demanda a la propuesta. En efecto, cada vez surgen más estrategias productivas con visión de mercado y ése es un elemento cualitativo que es importante resaltar porque confirma los conceptos y el marco teórico del desarrollo económico local.

La Unidad de Productividad y Competitividad trabaja fortaleciendo las cadenas productivas y lo está haciendo tanto en el ámbito nacional como regional. Espero que algunos de los presentes hayan tenido la oportunidad de conocer el trabajo que realizan los nueve Consejos Departamentales de Competitividad que hay en Bolivia.

En efecto, la promoción de las cadenas productivas ha llegado ya a las regiones porque se están vinculando procesos nacionales con los regionales. Nuestro desafío ahora es vincular además el nivel territorial o local.

Cuando observamos los problemas que plantea el II Foro para el Desarrollo Económico Local, constatamos que los obstáculos que enfrenta la promoción del desarrollo económico local —como por ejemplo, la debilidad institucional de los municipios, la insuficiente aportación de los privados, las limitaciones de los servicios de
desarrollo empresarial tanto financieros como no financieros—son los mismos obstáculos que enfrentan las cadenas nacionales en el nivel regional.

Aparentemente, en el país se están desarrollando dos procesos paralelos: uno en el nivel sectorial y otro en el nivel territorial. A la luz de la constatación anterior, comprendemos que ambos procesos son totalmente complementarios. De ahí que en vez de hablar y polemizar sobre cuál es el mejor o cuál no es el adecuado, yo sugiera una posición más propositiva que se anime a vincular ambos procesos. Esa es, como dije antes, la propuesta que traigo.

Para vincular los procesos, nuestra Unidad tiene una agenda con algunos temas importantes. Uno de estos temas es contribuir a volver más competitivos a los municipios.

Varios son los factores que aumentan la competitividad de un municipio. Uno de estos factores ocurre cuando el Gobierno municipal comprende que entre sus roles está el de crear condiciones que atraigan a la localidad iniciativas económicas e inversiones privadas. Al sector privado, por supuesto le corresponde el rol de desarrollar las iniciativas e invertir.

¿Cómo comenzamos a aumentar la competitividad de los municipios? Hemos hecho una encuesta para saber cuáles son las ventajas y desventajas competitivas de unos 75 municipios. Queríamos saber qué debían hacer para volverse más competitivos y constatamos que una medida importante era la simplificación de los trámites que necesita hacer un inversionista para abrir una empresa. Ya son siete los municipios de Bolivia que están simplificando sus trámites y esperamos seguir avanzando para masificar la simplificación.
Otro tema importante en nuestra agenda para vincular procesos, es juntar la promoción al desarrollo económico local con el desarrollo de las cadenas regionales y nacionales. Eso ya está ocurriendo. Muchos Consejos Departamentales de Competitividad han participado en la elaboración de los Planes de Desarrollo Departamental, en los que se han incluido apoyos a determinadas cadenas productivas regionales y nacionales. Además, algunos municipios apoyan en su Programa Operativo Anual a una u otra cadena productiva.

Esta vinculación también ocurre entre las Estrategias Productivas Integrales, que los municipios han formulado en el marco del Diálogo Nacional Bolivia Productiva, y los Acuerdos Bolivianos de Competitividad, que son el instrumento para promover las cadenas productivas del país.

Otra oportunidad interesante para el aumento de la competitividad de los municipios se abre con las nuevas competencias y recursos que el Decreto Supremo sobre el Impuesto Directo a los Hidrocarburos otorga los municipios. Es de esperar que los Gobiernos municipales inviertan estos recursos para desarrollar su competitividad, es decir para desempeñar cabalmente el rol que les corresponde en la promoción del desarrollo económico de sus localidades.

DONALD MERCADO SUAREZ — (Federación de Municipios de Bolivia): En el Área de Desarrollo Económico Local de la Federación de Municipios de Bolivia, hemos estado ocupados en la reglamentación de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que serán transferidos a los municipios.

Hemos trabajado en la definición de las competencias que tendrán los Gobiernos municipales para administrar estos recursos y en los criterios e indicadores que deberán utilizar para asignarlos.
Los criterios que orientan la administración de los recursos del IDH que serán transferidos a los Gobiernos municipales.

Este trabajo tiene un antecedente en la lucha de los Gobiernos municipales para conseguir los recursos del IDH.

Las competencias de los Gobiernos municipales para administrar los recursos del IDH se puedan resumir en cinco: asistencia técnica, capacitación, empleo, financiamiento y mercados.

Un antecedente de estas competencias es el proceso del Diálogo Nacional Bolivía Productiva que culminó en diciembre del 2004. Ese proceso se fortalece con los recursos y competencias que recibirán los Gobiernos municipales.

Lourdes Montero decía hace un momento que ya van años que venimos hablando del desarrollo económico local. Ahora creo que vamos a dejar de discutir, de teorizar porque ha llegado el momento de hacer.

En estos días, los Gobiernos municipales están elaborando sus Programas Operativos Anuales y podrán incluir en él los recursos del IDH. Lamentablemente, hemos visto Gobiernos municipales que dicen, por ejemplo: “Vamos a recibir dos millones de dólares y los vamos a dividir entre las comunidades, según su cantidad de habitantes. A la comunidad x le van a llegar cincuenta mil bolivianos y podrá hacer lo que quiera con ese dinero”

Esa es una solución fácil, que adopta un Gobierno municipal cuando no tiene capacidad de gestión y no tiene un proyecto político para hacer algo importante y útil en su municipio.

Si gastamos así los recursos del IDH, no vamos a tener resultados. Si tiramos la plata en cursos de bordado, de peluquería y cosas por el estilo, a la hora de evaluar el impacto de la inversión veremos que no hemos creado ningún empleo, ninguna empresa.
Precisamente para evitar ese despilfarro, el Decreto estipula que los recursos deben ser destinados a crear las condiciones para atraer empresas al municipio, que generen empleos para la población e ingresos para el Gobierno municipal. Para evaluar estos resultados, el Decreto establece indicadores.

En esta tarea de alentar a los Gobiernos municipales a gastar eficientemente y eficazmente sus recursos, estamos acompañados por representantes del Estado y algunos miembros de la cooperación.

**VLADIMIR SANCHEZ (AIPE):** Nuestra tarea es reflexionar y tratar de incidir en políticas públicas.

Entre las muchas tareas que hemos realizado este año, una de ellas ha sido articular el desarrollo económico local al Desayuno Escolar, en el marco del Decreto *Compra boliviano*.

Nos interesa el Desayuno Escolar no sólo porque contribuye a disminuir los problemas nutricionales de nuestros niños, sino porque es un buen medio para ampliar el mercado para los productos agropecuarios.

Para trabajar ese tema, hemos hecho primero un estudio para ver cuál es la situación del Desayuno Escolar y hemos evidenciado que solamente el 47 por ciento de los municipios de Bolivia brindan Desayuno Escolar y no todos ofrecen un Desayuno Escolar de calidad. Hay algunos municipios, sobre todo los grandes, que brindan un Desayuno Escolar adecuado desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de paliativo a la desnutrición. Otro aspecto que hemos podido evidenciar es que los municipios grandes están utilizando el *Compra boliviano* para licitar el Desayuno Escolar.

Otros municipios, principalmente rurales, no utilizan el *Compra boliviano*, pero están dando desayuno de calidad.
Sin embargo, hay otros municipios que con el nombre del Desayuno Escolar ofrecen cualquier cosa menos un buen desayuno.

Sobre la base de este diagnóstico, estamos preparando una propuesta que pensamos hacer llegar al próximo gobierno y que busca estandarizar el Desayuno Escolar, tanto desde el punto de vista de calidad y precios, para que todos los municipios del país brinden un buen Desayuno Escolar.

Hemos podido también identificar algunas dificultades importantes en el Compro boliviano, que debe ser simplificado. Otra dificultad importante es que los municipios son malos pagadores, lo que dificulta a los productores proveer en forma oportuna. Es necesario, entonces buscar algún mecanismo para que los gobiernos municipales puedan contar con recursos para pagar oportunamente a los productores.

La inversión que actualmente se dirige al Desayuno Escolar es de alrededor de veinte millones de dólares anuales. Creemos que con unos veinticinco millones de dólares adicionales se puede estandarizar el Desayuno Escolar en todos los municipios del país. Esos recursos se pueden financiar a partir de la inversión concurrente de los municipios, las prefecturas y seguramente del gobierno central.

Para poder trabajar en la lógica de la inversión concurrente es necesario establecer alguna metodología y algunos criterios, que luego habrá que transformar en leyes.

Otra tarea que nos hemos planteado es proponer el almuerzo escolar, que supone también una inversión importante y que tendrá un impacto significativo, no solamente desde el punto de vista económico sino desde el punto de vista nutricional.
EL NUEVO PARADIGMA DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO

Extraído de: Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural – ENDAR
Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, La Paz, agosto 2005

Los protagonistas centrales del desarrollo agropecuario y rural son los propios productores y el conjunto de actores económicos vinculados a la producción, comercialización y transformación de los bienes y servicios generados en el contexto rural. En ese marco, la concurrencia del Estado tiene por una parte, un rol promotor de las actividades de esos actores y, por otra, de apoyo a sus decisiones de inversión, trabajo y generación de ingresos, velando porque las mismas contribuyan a la seguridad alimentaria, a la reducción de la pobreza, a la equidad social y finalmente al desarrollo nacional.

Este rol promotor y de apoyo del Estado esta condicionado por la escasez de sus recursos y por la necesidad de incentivar a los actores rurales mas dinámicos; es decir, a aquellos que con su accionar contribuyen de manera mas afectiva al logro de los objetivos planteados y generan efectos multiplicadores.

Sin embargo, el Estado también asume el deber de contribuir a la reducción de la pobreza y a la superación de las condiciones de exclusión social, que en el área rural, afectan a un contingente poblacional importante. Debido a ello invertirá recursos y desarrollará acciones diferenciadas para estos estratos rurales, aunque siempre en un marco de incentivo al auto desarrollo, a la integración a los mercados y al desarrollo de una ciudadanía efectiva.
De esta manera, la estrategia se aplicará a partir de criterios ordenadores centrales que servirán para priorizar y/o diferenciar las intervenciones de apoyo al sector agropecuario y rural. Se trata de los mecanismos e instrumentos operativos para la aplicación de las siete políticas principales planteadas en la ENDAR desde el ámbito nacional, departamental y municipal. Las modalidades de intervención abarcan tres dominios: i) el Desarrollo Económico Local, ii) el Desarrollo de Cadenas Agro-Productivas, iv) las transferencias directas de recursos para las comunidades.

Se trata de modalidades de intervención funcionales, que recogen la realidad de que en el sector agropecuario boliviano coexisten a veces sobre un mismo territorio - formas productivas con diferente grado de desarrollo (desde la subsistencia hasta la agroexportación).

Las modalidades de intervención, en este contexto, son complementarias y no excluyentes, y están definidas por: el ámbito territorial de intervención, en enfoque de intervención, las características de los productores beneficiarios y la estructura institucional responsable de ejecutar las acciones de desarrollo. El apoyo estratégico se orientará, por lo tanto, a atender las necesidades específicas de los productores rurales (políticas diferenciadas), cuyas características se explican a continuación.

**El Desarrollo Económico Local (DEL)**

**a. Concepto**

El Desarrollo Económico Local (DEL) constituye el marco general para la ejecución de la estrategia y se orienta a transformar los mecanismos de la Participación Popular para el impulso del desarrollo rural. Las acciones conjuntas definidas entre los Gobiernos municipales o mancomunidades y los productores locales o regionales es para la identificación de sus oportunidades
competitivas y el desarrollo de sus posibilidades, se constituirán en la referencia central para la priorización de la inversión pública, el saneamiento de tierras y de todas las intervenciones de apoyo al desarrollo rural.

El DEL es un proceso que se manifiesta en un territorio determinado, basado en la conjunción del esfuerzo público-privado con una visión compartida de desarrollo, que permite diseñar estrategias y alianzas de carácter vinculante, que se plasman en Agenda de Responsabilidad Compartida, promoviendo inversiones concurrentes y que a su vez se ven reflejadas en los planes de desarrollo departamental y municipal, con la finalidad de operativizar los procesos de desarrollo en las Áreas de Desarrollo Económico Local para generar ingreso y empleo.

b. Metodología

El DEL persigue la conjunción de esfuerzos entre el sector público y privado con una visión compartida de desarrollo, que permite diseñar, elaborar estrategias y alianzas público-privadas, que se plasmen en Agenda de Responsabilidad Compartida (ARCO) y que, a su vez, se vean reflejadas en los planes operativos anuales y en los planes de desarrollo municipal, para concentrar las inversiones en desarrollo; todo esto en el marco de las atribuciones y competencias de los Gobiernos municipales o de las mancomunidades de municipios. Este aspecto se dirige fundamentalmente a promover inversiones concurrentes, vinculadas con actividades productivas.

En el DEL se rescata la importancia de los agentes económicos públicos y privados en el desarrollo económico local, por lo que se deberá fortalecer las diferentes organizaciones de productores, basándose en el respeto y rescate de sus identidades y costumbres culturales. En ese marco, se promoverá el posicionamiento de las
instancias participantes en un contexto más amplio, que genere mecanismos de cooperación, interrelaciones e innovación. Los principales actores del DEL que concurren en un ARCO pueden ser:

- Prefecturas
- Gobiernos Municipales
- Servicios Departamentales
- Organizaciones campesinas de productores y Organizaciones indígenas. Pequeños y medianos empresarios locales
- Comercializadores y transportistas
- Organizaciones No Gubernamentales
- Otros actores económicos y de servicios públicos y privados

Los resultados esperados de esta estrategia de intervención se generarán a través de este instrumento, la Agenda de Responsabilidad Compartida (ARCO), principalmente en lo concerniente a compromisos a cumplir e inversiones a realizar.

El proceso que se desarrolla en este caso es el siguiente: Los actores económicos locales y el Gobierno Municipal (o la mancomunidad) y las instancias técnicas con presencia local, identifican mediante un proceso de diálogo, el o los productos y/o servicios con mayor potencial competitivo de su ámbito territorial, que pueden corresponder a las siguientes categorías:

- Producción agropecuaria y forestal
- Transformación
- Artesanías
- Industria rural
• Turismo y ecoturismo

Se suscribe una Agenda de Responsabilidad Compartida (ARCO), entre todos los actores públicos y privados, orientada al desarrollo de un rubro o actividad económica, con enfoque de cadena productiva, que parte de la demanda del mercado.

Se realizan inversiones privadas y el Gobierno municipal facilita las condiciones de infraestructura física, transporte, comunicaciones, etc.

Dado que el desarrollo local constituye un bien público, el Estado se habilita para transferir recursos de manera directa a las organizaciones de productores o prestadores de servicios involucrados en ese proceso, con destino a proyectos que incluyan los siguientes rubros:

• Inversiones en equipamientos productivos
• Infraestructura productiva (microriego, silos, centros de acopio)
• Asistencia técnica y capacitación
• Financiamiento

c. Financiamiento del Desarrollo Económico Local

El Gobierno Central, Prefecturas, Gobiernos Municipales y el FPS priorizan las inversiones en infraestructura (caminos, puentes, riego, electrificación, comunicaciones) en los municipios que cuenten con agendas DEL suscritas y en operación.

Los gobiernos municipales, por su parte, podrán utilizar sus recursos de coparticipación tributaria, hasta el 70% de los recursos HIPC y de otros proyectos e incorporarán sus Agendas de Responsabilidad Compartida en los PDM y POA municipales.

Una instancia de monitoreo y coordinación operará en responsabilidad compartida con la Federación de Asociaciones
Municipales (FAM) y el Comité Interinstitucional de Organizaciones Económicas Campesinas (CIOEC). Estará encargada de:

- Introducir ajustes a partir de la sistematización de experiencias
- Incentivar redes que permitan aprovechar las experiencias entre regiones y entre rubros y temas priorizados para un aprendizaje horizontal
- Elaborar y aplicar un sistema de medición de impactos a partir de las experiencias concretas, en coordinación con UDAPE e INE.

d. Resultados esperados

Los resultados de la orientación al Desarrollo Económico Local son:

- Fortalecimiento de la Participación Popular al introducir la dimensión económica que a la larga hará sostenibles las inversiones y acciones sociales de los municipios.
- Generación de condiciones de eficiencia para la inversión pública y los servicios a la producción, al orientarlos hacia emprendimientos económicos concretos y consensuados.
- Implementación de las Estrategias Productivas Integrales (EPI).
EBERHARD GOLL (GTZ): Quiero lanzar un desafío a la panelista Lourdes Montero. Yo soy de Alemania. Nosotros exportamos seisientos mil millones de euros anuales y no hemos muerto. Exportar no significa morir, exportar significa ser mejor que su competidor en el mercado, enfrentar el desafío del mercado que le exige cada vez mejor. Competitivo significa ser mejor que su competidor.

Bolivia tiene todo para ser un buen exportador de diversos productos. Sin embargo, las políticas públicas han cambiado mucho en los últimos años y no han dado suficientes garantías para que el productor que quiere exportar tenga una línea clara que le permita invertir durante, por lo menos diez años, en su competitividad.

La situación política social del país tampoco lo ha permitido. Los últimos años han sido muy difíciles para que los exportadores puedan conservar sus mercados. El bloqueo de hoy impide colocar el producto mañana en el mercado de Sao Paulo y le cierra el mercado de pasado mañana. Todo esto hay que tener en cuenta si el país quiere ser un buen competidor en el mercado.

En el nivel del municipio, significa que el alcalde y el Concejo deben tener muy claros sus roles de facilitadores de procesos de desarrollo.

Construir infraestructura productiva no significa entregar un proyecto de riego al productor, al agricultor, al campesino. Hay que ir más allá. Es necesario orientar el producto hacia el mercado. Ahí está el desafío de la alcaldía y del concejo, que deben ayudar a organizar a los productores para que después de beneficiarse con una infraestructura básica, puedan llegar al mercado en buenas condiciones de competitividad.
LOURDES MONTERO: Acepto la provocación del compañero y lo felicito de que sea alemán y no un obrero de Guatemala o del norte de México, donde hay maquilla, o una obrera textil en Vietnam.

Apenas son nueve los países del mundo, que son los nueve países industrializados, que utilizan tecnología para producir. Por supuesto que esos países tienen un circuito de exportación virtuosa, que les permiten tener obreros calificados bien pagados.

Yo estoy hablando de procesos globales donde tenemos que competir con China, donde un obrero calificado gana un dólar al día. En el norte de México, ha habido una migración sistemática de toda la maquila porque allí se paga cinco dólares al día al obrero calificado. Mientras tanto, del otro lado de la frontera, en Estados Unidos, a apenas treinta minutos de carretera, un obrero calificado gana cincuenta dólares por día.

Estamos hablando de una división del mundo donde hay países-manos, como son todos los países del Tercer Mundo, y países-cabeza como Alemania, donde se trabaja con tecnología de punta, diseño e inteligencia de mercados.

MARCELO COLLAO (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación -COSUDE): Me han complacido las palabras pronunciadas al inicio de este foro, cuando se nos alentó a focalizar nuestra mente en las potencialidades y desafíos más que en los problemas y las dificultades.

Coincido con los panelistas de que ya no es tiempo para juntar trescientas o quinientas personas en mesas de conversación o debates. Creo que ahora es el momento de hablar en ruedas de negocios para intercambiar productos; para que de Uyuni salga quinua para Cobija y de Cobija salga castaña para el Desayuno Escolar de Tarija.
Creemos que es importante pensar en mecanismos e instrumentos que nos permitan ampliar el mercado interno. Tenemos el mecanismo del Desayuno Escolar que abre mercados para nuestros productores y fortalece la salud de nuestra niñez.

Vinculemos también el enfoque del desarrollo económico local con el de las cadenas productivas para que converjan en acciones concretas.

No son recursos financieros los que faltan. COSUDE y el BID apoyan un proyecto de veinte millones, el Banco Mundial financia otro proyecto de veinte millones en agro negocios,

Creo que eventos de este tipo nos invitan a generar instancias que permitan a los municipios conversar para hacer negocios entre ellos.

NOEL ROJAS (Alcalde de Comarapa): Creo que muchos municipios no han puesto en marcha la promoción del desarrollo económico local porque su debilidad institucional no les permite tener suficiente personal calificado para trabajar ese tema.

Sin embargo, yo no voy a hablar de este tema sino que voy a compartir con ustedes una experiencia de Comarapa.

Este año, hemos cambiado el insumo del Desayuno Escolar. En el pasado, el Gobierno municipal de Comarapa comparaba leche polvo y luego distribuía a las escuelas. Eso era muy fácil.

Nosotros hemos empezado a comprar la producción local de leche fresca. Tenemos siete proveedores y estamos buscando un proveedor para cada comunidad donde hay una escuela. No ha sido posible todavía cubrir todo el Desayuno Escolar con leche local. Entonces estamos
Experiencia positiva del municipio de Comarapa, que ha alentado el desarrollo de la producción local, a través de las compras para el Desayuno Escolar.

mejorando la calidad del desayuno para por lo menos tener la seguridad de que damos alimentos frescos.

Este proceso de comprar leche local nos ha permitido hacer algunas alianzas. Por ejemplo, en Comarapa hay un instituto agropecuario que produce una parte de la leche que compramos. El Gobierno municipal ha hecho una alianza con ese instituto para que el instituto pueda dotarse de una pequeña planta procesadora de leche. A través de ésta nueva microempresa, fomentamos a algunos pequeños productores financiándoles una o dos vacas para que abastezcan al instituto. Los productores están pagando el costo de la vaca con el producto de la leche.

A consecuencia de esta primera experiencia, que consideramos bastante exitosa, hemos lanzado un nuevo proyecto llamado Mujeres emprendedoras.

Cerca de cien mujeres se han organizado en tres empresas para procesar y transformar frutas y hortalizas que son incorporadas al Desayuno Escolar. Es decir que el Gobierno municipal compra lo que estas mujeres producen.

Creo que de esa manera, el Gobierno municipal de Comarapa está complementando algunas cadenas productivas e incentivando la creación de microempresas. Además, está generando empleo para cien mujeres.

Y son buenos empleos, porque también hemos tomado en consideración los intereses de los niños de estas mujeres. En nuestra comunidad, las mujeres van y ganan un jornal como los hombres y llevan con ellas a sus niños y los niños se asolean todo el tiempo que dura el trabajo de sus madres, sin poder estar realmente con sus mamás.

En cambio, las cien mujeres que trabajan en su propia microempresa de transformación de fruta y hortalizas pueden llevar su trabajo a casa y atender mejor a sus niños.
PERCY BACARREZA (ATICA): Quiero corroborar lo que decía Edmundo, cuando mencionaba la importancia que tiene el capital social. Es un gran desafío generar el desarrollo local, y para ello ya sabemos que el capital financiero, la tecnología y los recursos naturales no son suficientes. También es muy importante la confianza entre los actores, las redes de relaciones, la información, la solidez de las instituciones. Es decir, el capital social.

No se ha mencionado mucho, pero es urgente pensar en la importancia que tienen las redes institucionales para apoyar los procesos de desarrollo económico local. Bolivia es un país lleno de instituciones públicas apoyadas por la cooperación internacional. Y todos sabemos que no hay coordinación entre ellas. Por lo tanto, si queremos poder apoyar el desarrollo económico local, las instituciones debemos trabajar construyendo redes que nos ayuden a coordinar nuestros esfuerzos. Estas redes son también capital social.

También debemos poder planificar más allá de lo local, y para ello creo que es importante el ordenamiento territorial. Planificamos sin ordenamiento territorial, de acuerdo a algunas potencialidades locales. Pero creo que el ordenamiento territorial es importante para, como decía Lourdes, pensar en lo global y actuar en lo local.

Durante once años, la planificación participativa ha generado los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) y los Programas Operativos Anuales (POA). Ahora, que queremos pensar con la visión o enfoque del desarrollo económico local, creo que debemos mejorar esta forma de planificar. La planificación participativa es un instrumento interesantísimo, pero creo que se debe hacerse aún más participativa.

Importancia del capital social

Fortalecer redes interinstitucionales para que las instituciones sostenidas por la cooperación internacional apoyen coordinada y eficientemente el desarrollo económico local.

El ordenamiento territorial es indispensable para una planificación integral.
Otro tema que también considero importante es el de las cadenas y sus relaciones con el desarrollo económico local. Yo creo que al inicio de los procesos de desarrollo económico local no debemos encadenar todo. Creo que debemos dejar que los procesos económicos, que son nuevos para Bolivia, vayan ocurriendo. Si al final, las cadenas van a orientar los procesos, entonces encadenemos, pero no tan pronto.

Hemos hablado de la competitividad de los países y hemos visto cómo algunos países logran ser competitivos: unos con tecnología de punta, otros con mano de obra barata. Sin embargo, no hemos recordado que la competitividad en el mundo se está dando a través de la subvención. Nosotros subvencionamos la importación de autos chutos.

Quizás debamos pensar, Jorge, en subvenciones para apoyar nuestros procesos de desarrollo económico local. Puesto que no somos generadores de tecnología y tampoco podemos vender barata nuestra mano de obra, debemos subvencionar a las empresas que agregan valor a nuestras materias primas y que generan empleo.

MARCELO ORGAZ (Presidente del Consejo Municipal de Tomina): Buenas tardes, soy el Presidente del Concejo del Municipio de Tomina, que forma parte de la mancomunidad de Chuquisaca Centro. Aquí también están los colegas de Alcalá, Tarbita, Sopachuy y Padilla. La Mancomunidad de Chuquisaca Centro es un proceso que ha comenzado hace seis años y en él participan ocho municipios.

Quisiera invitar a todos los presentes a conocer las experiencias positivas del Desayuno Escolar en la mancomunidad de Chuquisaca Centro.

Desde hace ya tres años que el Desayuno Escolar se brinda productos locales como son la harina integral, el api fortificado, el tojorí y el yogurt elaborado en la misma zona.

Expertiencia positiva del la mancomunidad Chuquisaca Centro, que ha alentado el desarrollo de la producción local, a través de las compras para el Desayuno Escolar.
La oferta de los productores supera a la demanda que tienen los Gobiernos municipales. Sin embargo, las compras para el Desayuno Escolar han asegurado mercado con un precio justo para la materia prima de los productores. Antes, la arroba de trigo valía en la zona cinco bolivianos, ahora vale quince. Esto ha ocurrido porque existe un mercado seguro, por lo menos para una parte de la producción. Además, se ha generado empleo para la transformación de los productos.

Creemos que el Gobierno municipal está cumpliendo su rol en la promoción de nuestra producción. Pero, ¿cuál es el rol de la prefectura? El Impuesto Directo a los Hidrocarburos no solamente llega a los Gobiernos municipales, también llega a los Gobiernos prefecturales. ¿Pero qué hace el Gobierno prefectural con el Programa Nacional de Atención a Niñas y Niños Menores de 6 años (PAN)? Nosotros queremos vender nuestra harina integral a los centros iniciales del PAN, para el alimento de nuestros niños. Pero la prefectura prefiere comprar harina argentina. ¿Es eso positivo, es favorable el rol que está cumpliendo la prefectura, está fortaleciendo los procesos iniciales? ¿Cuál va a ser el rol del Gobierno prefectural en el apoyo de la economía local?

La cooperación internacional no cesa de hablar sobre el desarrollo económico local y ofrece equipamiento –que es bienvenido– para los procesos de transformación. Pero se olvida del desarrollo económico local cuando ofrece alimentos por trabajo. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) viene a nuestras regiones para donar harina y sardina y así desvaloriza nuestra propia producción, a través de nuestra misma gente.

¿Qué es lo que estamos haciendo todos los actores para fortalecer el desarrollo económico local? El Gobierno municipal no debe asumir sólo toda la promoción del
desarrollo económico local. Son varios actores los que deben participar. Por eso, que hay que hacer un análisis profundo del rol de todos los actores y, además, determinar qué es local. Debemos saber si lo local es el municipio, la región, el departamento o la nación.

Creo que estas definiciones son claves para ponernos de acuerdo y buscar una coordinación para que lo que estamos hablando se convierta en acción y no se quede en simple discurso, mientras toda la carga cae sobre los Gobiernos municipales.

JORGE TREVIÑO (Presidente Directorio Único de Fondos -DUF): Mi nombre es Jorge Treviño y soy presidente del Directorio Único de Fondos -DUF y voy a comenzar mi intervención con una autocrítica: el DUF tiene demasiados objetivos. Atiende desde la formulación de las políticas de los Fondos de Desarrollo, hasta los planes de generación de empleo temporal como son el Plan Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE) y el Programa contra la Pobreza y Apoyo a la Inversión Social PROPIAS).

Es decir que el DUF tiene demasiados horizontes que enfocar y cuando no hay un objetivo claro y hay demasiadas metas, finalmente no se alcanza nada. Creo que ése ha sido uno de los factores que impidieron el éxito que esperaba la Política Nacional de Compensación, que se inició después del Diálogo 2000.

Durante cuatro o cinco años hemos apoyado a los municipios a consolidar sus Programas Operativos Anuales y particularmente con el Fondo de Inversión Productiva y Social (FIS) hemos invertido mucho en infraestructura. Hemos financiado desde la construcción de escuelas y postas sanitarias, hasta el mejoramiento de plazas. También hemos apoyado al desarrollo económico local financiando sistemas de riego y puentes, y otra infraestructura productiva.
Pero, todo lo hemos hecho sin un horizonte preciso. Ahora, con la Política de Transferencias Condicionadas estamos realizando un cambio fundamental en la Política Nacional de Compensación. El objetivo que queremos lograr es contribuir a las Metas del Milenio, que es un objetivo nacional, más allá de los objetivos que buscamos alcanzar en cada localidad. Por supuesto que las Metas del Milenio tendrán impacto en las regiones y los municipios.

La primera Meta del Milenio es reducir la pobreza. Quizás debiera ser formulada de otra manera porque lo que de verdad se busca es aumentar la riqueza.

Si los municipios están dispuestos embarcarse en la lucha para generar riqueza, estoy seguro de que el gobierno central y los gobiernos prefecturales van a contribuir con, por ejemplo, fondos concursables, que son una forma de las transferencias condicionadas que mencioné.

Con ese apoyo, los municipios van a poder contribuir a lograr algunas metas mucho más importantes que las que hemos logrado hasta ahora.

En Bolivia todavía tenemos muchos municipios donde la situación es desoladora. Por ejemplo, en el departamento de Cochabamba se encuentra el municipio con mayor índice de pobreza. Es el municipio de Tacopaya que tiene una población de más de once mil cuatrocientas personas. De todas ellas, apenas 45 personas tienen un ingreso mensual superior a los 139 Bs. Sin embargo, en el mismo departamento está el municipio de Cochabamba que es el que tiene el menor índice de pobreza del país.

Todas estas cifras son proporcionales, por supuesto, pero revelan que en el país existen desigualdades y extremos muy fuertes.

Como muchos de ustedes, yo también creo que el Gobierno central y sobre todo las prefecturas deben encarar la importante tarea de disminuir esas diferencias.
TEÓFILO MARTÍNEZ (Presidente del Concejo Municipal de Padilla): Creo que se ha hecho mucho para apoyar al desarrollo económico local. Los alcaldes han cumplido en lo que se refiere a infraestructura de caminos, agua potable y micro riego. Pero, es importante que diferenciamos el apoyo a la producción de la promoción a la economía local.

Si alguna organización, alguna asociación quiere tener competitividad en el mercado, necesita equipamiento. Si no tecnificamos la producción, no se la promueve.

Los gobiernos municipales encontramos normas legales que nos impiden apoyar a los productores. Las leyes no nos permiten ofrecer el equipamiento que necesitan los productores.

Nosotros tenemos experiencia en la producción de ajo. Tenemos las potencialidades que puede tener la mano de obra, tenemos condiciones climáticas adecuadas para lograr una elevada producción. Pero nos falta tecnificar, nos falta equipamiento y el gobierno municipal está con las manos atadas porque no puede comprar una pesadora, una mecedora o un motor para la Asociación de Productores. No puede porque es una organización privada y la ley no lo permite.

Creo que hay una contradicción en las normas legales. Por una parte, se dice que el gobierno municipal debe promover la economía. Pero sólo se nos permite capacitar. Así vamos a avanzar muy lentamente. Estamos obligados a esperar que las asociaciones ahorren sus propios recursos para empezar a crecer, pero a paso de tortuga.

En muchos casos nos estamos mintiendo, no somos realistas. ¿Qué lindo sería que el gobierno municipal pudiera usar los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos para comprar un molino, construir un almacén o un silo
para los productores de papa, de maní, por ejemplo. Y después de equipar y tecnificar a los productores, pudiéramos empezar a abrir mercados.

El ají, por ejemplo tiene buen mercado en Uruguay y Argentina. Pero no logramos abastecer esa demanda porque esos mercados requieren cantidades que nuestros productores no pueden cubrir, porque no tiene el equipamiento o la tecnificación que se necesita para producir grandes volúmenes.

Entonces avanzando muy lentamente. Tenemos que cubrir ese vacío legal. Cuando los gobiernos municipales puedan equipar, tecnificar, capacitar y organizar a sus productores, cada municipio podrá desarrollar sus potencialidades, las potencialidades de cada región y podrá aprovechar las oportunidades de comercializar internacionalmente.

CARLOS PORTOCARRERO (Viceministro de Participación Popular):

Se me ha encomendado clausurar este foro con unas palabras que sinteticen su desarrollo y expongan –a manera de conclusiones– lo que hoy hemos hablado. Se darán cuenta que por la diversidad de enfoques y posiciones respecto a un tema en el que nos queda mucho camino por andar, la tarea encomendada es harto difícil. Sin embargo, y teniendo en cuenta lo reducido del tiempo, voy a hacer un intento de síntesis, que incluirá una posición respecto a lo escuchado y que expresará, además, aspectos que me llamaron la atención.

Debemos comprender que no es casual que el país no haya logrado hasta ahora articular una política pública clara, coherente y consistente con los desafíos del desarrollo económico local. Son muchas las iniciativas provenientes de muchas vertientes, pero no están precisamente acompañadas por un accionar gubernamental que las liderice, oriente, regule y monitoree.
Las políticas públicas han estado y aún están concentradas en aspectos de orden más macro y buscan incidir en la economía urbana, la industria y la exportación. En ese contexto, el Diálogo Nacional Bolivia Productiva termina siendo la única iniciativa de política pública en el sentido del desarrollo económico local; con todas las debilidades que tuvo ese proceso.

Existen serios indicios de que el Diálogo fue un proceso fallido, porque se concentró quizás excesivamente en los deseos y buenas intenciones, y no tomó en cuenta las capacidades efectivas ni financieras para realizar estos deseos.

Seguidamente voy a hacer referencia a aspectos más bien puntuales, aunque no desconectados de lo anteriormente dicho que llamaron mi atención durante las intervenciones.

Hemos tomado nota de que las mancomunidades no han llegado a satisfacer la gran expectativa que despertaron. A pesar de los esfuerzos y recursos, las mancomunidades no terminan de cuajar en un instrumento que ofrezca respuestas efectivas, que se perciban en términos de impacto y resultados.

Seguramente, ése también es un proceso en el que hay que seguir trabajando, pero desinflando un poco la burbuja que se ha creado. Coincido con Lourdes Montero en que debemos alentar a las mancomunidades a focalizar objetivos más pragmáticos y precisos.

No quisiera cerrar este foro sin mencionar una percepción que tengo. Me parece que damos mayor prioridad al instrumento que a su función. Nos complacemos diciendo que los instrumentos existen y si no han funcionado es porque no los hemos utilizado. Yo quisiera hacer girar esta afirmación en sentido inverso y decir que si los instrumentos no han funcionado es por algo intrínseco en ellos, y que, por lo tanto, habría que cambiarlos.
Los instrumentos son productos de un proceso mental, pero los reverenciamos tanto, que no ponemos a prueba su desempeño en la realidad y los conservamos por más deficiencias que hayan demostrado tener.

Generalizando quizá excesivamente, me atrevo a afirmar que en todo el proceso de fortalecimiento municipal nos hemos focalizado excesivamente en la construcción de los instrumentos, y éstos han terminado siendo fines en sí mismos.

Quizás debamos desafiar más paradigmas y cambiar esquemas mentales para comprender que los instrumentos deben ser utilizados y puestos a prueba. Si no dan buenos resultados, deben ser modificados.

Por ejemplo, las cadenas productivas no dejan de ser instrumentos. Pero yo percibo una manera de pensar que parece considerar las cadenas como un fin en sí mismo. Me preocupa, por ejemplo, que se diga que las cadenas funcionan a nivel nacional y departamental, pero aún no a nivel local.

Para mí, el nivel nacional y departamental son conceptos, construcciones casi abstractas ya que, en realidad, no son más que la agregación de los esfuerzos locales.

Sin duda, tendremos mejores resultados con éste o con cualquier otro instrumento cuando nos aproximemos más al nivel local, donde cualquier esfuerzo se torna pragmático y funcional.

Otro ejemplo de nuestra tendencia de convertir los instrumentos en fetiches, es la insistencia con la que se preconiza la necesidad de articular los procesos de desarrollo económico a una planificación que utiliza conceptos e instrumentos como el Plan de Desarrollo Departamental o el Plan de Desarrollo Municipal.
Desde mi experiencia, en diez años no he visto todavía un PDD que haya arrojado impactos y resultados tangibles. La gran mayoría de estos planes se ha quedado en la formulación. Un plan nos satisface porque es el producto de un proceso de planificación, pero no tenemos una visión de la planificación más exigente, dinámica y funcional que nos conduzca a construir un instrumento que nos lleve a resultados tangibles.

Deseo cerrar este foro agradeciendo a los panelistas por sus aportes y a todos ustedes por su participación.
DECRETO SUPREMO N° 28421

EDUARDO RODRÍGUEZ VELTZÉ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 53 de la Ley N° 3058 de 17 de mayo de 2005 – Ley de Hidrocarburos, crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH, que se aplica a la producción de hidrocarburos en su primera etapa de comercialización.

Que el Artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos, establece la distribución del IDH entre los Departamentos Productores, Departamentos no Productores, Compensación a los Departamentos Productores que perciban menores ingresos por concepto de IDH respecto a los Departamentos no Productores, Tesoro General de la Nación - TGN, Pueblos Indígenas y Originarios, Comunidades Campesinas, Municipios, Universidades, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros.

Que el Artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos, en su penúltimo párrafo, establece que los beneficiarios de los recursos percibidos por concepto de IDH destinarán estos ingresos a los sectores de educación, salud, caminos, desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de empleo.

Que para la adecuada aplicación del Artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos, es necesario complementar el procedimiento de distribución del IDH definido en el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 28223 de 27 de junio de 2005 y el Decreto Supremo N° 28333 de 12 de septiembre de 2005 y definir las competencias adicionales que deben ejercer los beneficiarios de los recursos percibidos por el IDH.
Que la transferencia de mayores recursos y responsabilidades a nivel departamental y municipal, forma parte del proceso de descentralización, el cual es preciso continuar profundizando.

Que es necesario establecer de manera clara los mecanismos de control aplicables al uso y destino de los recursos provenientes del IDH.

Que tomando en cuenta lo anteriormente citado, es necesario dictar la presente norma, la misma que en el marco del Capítulo IX del Decreto Supremo N° 27230 de 31 de octubre de 2003, fue aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica—CONAPE en fecha 20 de octubre de 2005.

EN CONSEJO DE GABINETE,

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 28223, referido a la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos — IDH y asignación de competencias.

ARTÍCULO 2.- (MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 8). Se modifica el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 28223 de 27 de junio de 2005, modificado por el Decreto Supremo N° 28333 de 12 de septiembre de 2005, de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 8.- (DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS — IDH Y ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS).

1. Distribución:

   El monto recaudado en efectivo por el IDH, se distribuirá según el siguiente detalle:

1. Departamentos

   a) 12.5% del monto total recaudado en efectivo, en favor de los Departamentos Productores de hidrocarburos, distribuidos según su producción departamental fiscalizada.
b) 31.25% del monto total recaudado en efectivo, a favor de los Departamentos no Productores de hidrocarburos, a razón de 6.25% para cada uno.

c) La compensación otorgada por el Tesoro General de la Nación – TGN, al Departamento Productor cuyo ingreso por concepto de IDH sea menor al de un Departamento no Productor, con el objeto de nivelar sus ingresos a los del Departamento no Productor.

El 100% de los ingresos percibidos por cada Departamento de acuerdo a lo señalado en los incisos a), b) y c) anteriores, será abonado a una cuenta “IDH –Departamental” en el Banco Central de Bolivia, para su transferencia de manera automática a las cuentas de las Prefecturas Departamentales, Municipios y Universidades Públicas, habilitadas en el sistema financiero, bajo la denominación “Recursos IDH”, de acuerdo a la siguiente distribución:

- 34.48% para el total de los Municipios del Departamento, el cual será distribuido entre los beneficiarios de acuerdo al número de habitantes de su jurisdicción municipal, establecido en el censo vigente, y

- 8.62% para la Universidad Pública del Departamento.

En el caso de los Departamentos que cuenten con dos o más universidades públicas, los porcentajes de distribución se determinarán mediante reglamento consensuado entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana – CEUB y las Universidades Públicas beneficiarias, respetando el límite financiero asignado a cada Departamento.

- El saldo de los anteriores porcentajes para la Prefectura del Departamento.

2. Tesoro General de la Nación – TGN

El saldo del monto total recaudado en efectivo por el IDH una vez deducidos los montos del numeral anterior, se destinará en favor
del Tesoro General de la Nación – TGN, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso d) del Artículo 57 de la Ley N° 3058, recursos que serán distribuidos de la siguiente manera:

a) 5% del total de las recaudaciones del IDH, monto que será deducido del saldo correspondiente al TGN, destinado a un Fondo Compensatorio para los Municipios y Universidades de los Departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba que por tener mayor población, perciben menores ingresos en relación a los Municipios y Universidades de los demás Departamentos.

El mencionado porcentaje será asignado de acuerdo al siguiente criterio:

i) La Paz 46.19%

ii) Santa Cruz 36.02%

iii) Cochabamba 17.79%

Estos montos serán destinados en un porcentaje de 80% para Municipios, el cual será distribuido de acuerdo al número de habitantes de cada jurisdicción municipal, y 20% para Universidades Públicas.

En el caso de los Departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba que cuenten con dos o más universidades públicas, los porcentajes de distribución se determinarán mediante reglamento consensuado entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana – CEUB y las Universidades Públicas beneficiarias, respetando el límite financiero asignado a cada Departamento.

b) 5% del total de las recaudaciones del IDH, monto que será deducido del saldo correspondiente al TGN, el cual será asignado a un Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Originarios y Comunidades Campesinas.
Los recursos correspondientes al mencionado Fondo serán desembolsados de acuerdo a Decreto Supremo que reglamentará su creación y funcionamiento.

En el marco de sus competencias y atribuciones, los Gobiernos Municipales y Prefecturas ejecutarán proyectos de desarrollo indígena, presentados por organizaciones indígenas de su jurisdicción territorial, en el marco de la planificación participativa municipal y departamental, empleando como contraparte recursos del Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Originarios y Comunidades Campesinas.

c) Un monto otorgado mediante asignación presupuestaria anual a:

- Las Fuerzas Armadas de la Nación, y

- La Policía Nacional de Bolivia.

Las instituciones mencionadas utilizaran estos recursos mediante la acreditación de programas y proyectos específicos, así como en actividades de fortalecimiento institucional.

d) 5% para el Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo Nacional destinado a la masificación del uso del Gas Natural en el país, porcentaje que será aplicado sobre el saldo de la distribución y asignación de recursos a todos los beneficiarios indicados anteriormente.

El Fondo mencionado será administrado por el Ministerio de Hidrocarburos, de acuerdo a reglamentación emitida para el efecto.

A objeto de realizar la administración y control de los ingresos por concepto del IDH, el TGN habilitará cuentas corrientes fiscales en el Banco Central de Bolivia y en los bancos administradores delegados en el sistema financiero nacional.

Del monto que debe ser abonado a las cuentas correspondientes de los beneficiarios, habilitadas en los bancos administradores delegados en el sistema financiero nacional para el manejo de los recursos del IDH, el Banco Central de Bolivia descontará, previamente, el importe correspondiente a comisiones por la administración de cada cuenta.
El TGN abonará los recursos a los beneficiarios, hasta el quinto día hábil del mes siguiente al de vencimiento del pago del IDH, en sus correspondientes cuentas bancarias.

II. Competencias:

En el marco de lo que establece el Artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos, sobre la base a los recursos asignados en el numeral I del presente Artículo, los beneficiarios del IDH destinarán estos ingresos a:

a) Prefecturas:

Para los fines del presente Decreto Supremo, las áreas sobre las cuales se invertirán los recursos IDH, en el marco de los Planes de Desarrollo Departamental y políticas nacionales sectoriales, son:

1. Desarrollo económico.
   i) Construcción y mantenimiento de la red departamental de caminos.
   ii) Financiamiento de contraparte para electrificación rural y riego.
   iii) Asistencia técnica y capacitación al sector productivo, en concurrencia con los Gobiernos municipales.
   iv) Facilitación para el acceso del sector productivo al sistema financiero y para el financiamiento de proyectos de transferencia e innovación tecnológica aplicada y programas de sanidad agropecuaria en el sector agropecuario.
   v) Fortalecimiento de entidades descentralizadas, en el ámbito de jurisdicción.

2. Desarrollo social.

   i) Complementación de medidas de aseguramiento público en salud.
   ii) Sistema de información para la investigación y vigilancia epidemiológica.
   iii) Construcción y mantenimiento de infraestructura; dotación, mantenimiento y reposición de mobiliario, equipo de computación
y equipamiento; y mantenimiento y reposición de equipo de transporte para:


b. Direcciones Distritales de Educación.

c. Institutos Normales Superiores e Institutos Técnicos Públicos en Educación.

d. Gerencias de Redes de Salud y Brigadas Móviles de Salud.

e. Institutos de Formación Técnica e Institutos de Investigación y Normalización en salud.

iv) Complementación de recursos humanos para servicios y brigadas móviles de salud y gerencias de redes.

v) Contraparte en equipamiento, transporte, medicamentos e impresión de materiales para la prevención y control de enfermedades.

vi) Capacitación de los funcionarios técnicos en educación y salud, según plan de capacitación e institucionalización prefectural.


i) Fortalecimiento de las instancias y servicios de seguridad ciudadana.

ii) Infraestructura y equipamiento de cárceles públicas.

b) Municipios:

1. Educación.

i) Fortalecimiento de la gestión educativa municipal:

- Institucionalización, consolidación y garantía del funcionamiento de la instancia de gestión educativa municipal.

- Planificación Municipal de Educación, en el marco de los Planes de Desarrollo Municipal, los Planes contendrán proyectos educativos bajo las directrices nacionales, co-financiado por el Gobierno Nacional.
- Provisión de asistencia técnica para la implementación de los Planes Municipales de Educación.

ii) Promoción al acceso y permanencia escolar a través de:

- Provisión de servicios de alimentación complementaria escolar.
- Servicios de transporte escolar.
- Implementación de internados escolares y hospedajes.
- Generación de becas escolares e incentivos.

iii) Provisión de infraestructura, procesos pedagógicos y equipamiento para mejorar la calidad y promover la equidad de la educación escolar:

- Dotación de equipamiento, mantenimiento y reposición de equipo informático y software, audiovisuales, bibliotecas de escuela, bibliotecas de aula y material didáctico.
- Dotación y reposición de material de escritorio, limpieza e higiene y seguridad a las unidades educativas.
- Construcción, ampliación, refacción y mantenimiento de la infraestructura educativa (incluida la deportiva y artística formativa y de investigación) y mobiliario.
- Construcción, ampliación, refacción y equipamiento de los Centros de Recursos Pedagógicos – CRP de los núcleos educativos y redes; así como de los Institutos de Lengua y Cultura, según definan los pueblos indígenas y originarios y comunidades campesinas, en el marco de las políticas sectoriales y con recursos de contraparte del Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Originarios y Comunidades Campesinas.

iv) Distribución y conservación de los materiales educativos producidos por el Ministerio de Educación.
2. Salud.

i) Fortalecimiento de los Directorios Locales de Salud – DILOS, con financiamiento de la gestión operativa para:

- Supervisión de servicios de salud.

- Operación de los Comités de Análisis de la Información Municipal (CAI-Municipal) y comunitario (CAI-C).

- Planificación Estratégica Municipal en Salud, ligada al Plan de Desarrollo Municipal – PDM, información, educación y capacitación a comunidades y juntas vecinales.

ii) Campañas masivas de vacunación y acciones municipales de prevención y control de enfermedades endémicas, programadas por el Ministerio de Salud y Deportes, tales como la malaria, el dengue, chagas, leishmaniasis, fiebre amarilla, tuberculosis, rabia y otros. Estas acciones deberán ser incorporadas de forma obligatoria en los POA anuales y el financiamiento municipal cubrirá los gastos operativos, insumos (excepto biológicos e insecticidas) y la contratación de servicios relacionados.

iii) Asistencia nutricional complementaria para el menor de dos años, con financiamiento para el complemento nutricional y gastos operativos para su distribución.

iv) Brigadas Móviles de Salud, con financiamiento de gastos operativos (estipendio, combustible, lubricantes y mantenimiento).

v) Conformación de fondos municipales de contraparte para proyectos integrales de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

vi) Programas operativos de vigilancia y control epidemiológico a nivel local.

3. Fomento al desarrollo económico local y promoción de empleo.

ii) Asistencia técnica y capacitación al sector productivo a través de programas y proyectos de investigación e innovación tecnológica,
investigación de mercados, gestión de calidad, gestión de procesos, fortalecimiento a organizaciones productivas, calidad, marketing, elaboración de planes de negocios para la micro, pequeña y mediana empresa, rueda de negocios, capacitación para la transformación de productos primarios.

iii) Facilitación al acceso al sistema financiero a través del apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa para la conformación de fondos de garantías, capital semilla, capital riesgo subsidios a los costos de transacción y seguros u otros mecanismos de financiamiento público - privado. En este ámbito, los Ministerios de Hacienda y Desarrollo Económico, en un plazo no mayor a 60 días de publicado el presente Decreto Supremo, mediante Resolución bi-ministerial expresa, determinarán los procedimientos a ser aplicados.

iv) Provisión de servicios, infraestructura y equipamiento de centros de acopio, centros artesanales, maquincentros, centros de promoción turística, centros feriales, centros de formación y/o capacitación para la producción, centros de investigación y desarrollo, incubadoras de empresas, zonas y parques industriales y/o tecnológicos.

v) Organización y desarrollo de instancias responsables de la promoción productiva municipal y/o mancomunitaria, promoción del territorio y desarrollo de espacios e instancias de concertación público – privado.

vi) Promoción de empleo a través de la participación operativa en programas nacionales de generación de empleo temporal y permanente, el desarrollo de programas de capacitación, seguimiento del mercado laboral y creación de bancos de empleo.

4. **Seguridad Ciudadana.**

En el marco de programas municipales de seguridad ciudadana, los Gobiernos municipales dotarán a la Policía Nacional de módulos o instalaciones policiales, equipamiento, mantenimiento y provisión
de servicios básicos, para la prestación de servicios policiales y de seguridad ciudadana integrales.

La Policía Nacional y los Gobiernos Municipales coordinarán acciones que permitan desarrollar estos programas de manera semestral. La Policía Nacional es responsable del uso y conservación de los bienes a su cargo.

c) **Universidades**

Las Universidades Públicas utilizarán los recursos provenientes del IDH en actividades definidas en los Programas Operativos Anuales

- POA y consignados en el presupuesto de la gestión, en los siguientes componentes:
  - Infraestructura y equipamiento académico.
  - Procesos de evaluación y acreditación bajo la normativa vigente.
  - Programas de mejoramiento de la calidad y rendimiento académico.
  - Investigación científica, tecnología e innovación en el marco de los planes de desarrollo y producción a nivel nacional, departamental y local.
  - Programas de interacción social dirigidos principalmente a poblaciones vulnerables y con altos índices de pobreza.

Todas las Universidades Públicas prestarán apoyo pedagógico, disciplinar y curricular a los Institutos Normales Superiores – INS además de programas de educación inicial y especial, sobre la base de convenios específicos.

III. **Programas de Inversión IDH:**

Cada entidad, priorizará anualmente las asignaciones a realizar en las competencias descritas anteriormente y preparará un Programa de inversión con recursos del IDH, el cual deberá ser incorporado en sus Programas Operativos Anuales y verificado al inicio de la
gestión fiscal, para el caso de las Prefecturas, por el Ministerio de Hacienda. Los Gobiernos Municipales y las Universidades presentarán Programas de Inversión IDH para la verificación del cumplimiento del presente Decreto Supremo a las instancias definidas por norma legal.

IV. Indicadores:

Con el objeto de garantizar la eficiencia en el uso de los recursos provenientes del IDH en el marco del Artículo 57 de la Ley 3058, en un plazo no mayor a 90 días desde la publicación del presente Decreto Supremo, el Poder Ejecutivo y los beneficiarios, establecerán, sobre una línea de base, bancos de datos con el objeto de determinar metas e indicadores de desempeño y sistemas de control, monitoreo y evaluación para el cumplimiento de las competencias establecidas en el presente Decreto Supremo.

Una vez determinado lo referido en el párrafo precedente, el incumplimiento será pasible a las sanciones previstas en las normas legales en actual vigencia.

V. Control de los recursos otorgados a los beneficiarios:

1.Ámbito de aplicación de los recursos y cumplimiento de competencias. Los recursos distribuidos a las Prefecturas Departamentales, y los asignados a los Municipios y Universidades, sólo podrán utilizarse en el cumplimiento de las competencias señaladas en el presente Decreto Supremo y en las competencias establecidas en la Ley N° 3058 – Ley de Hidrocarburos, educación, salud, caminos, desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de trabajo.

2. Registro y Control. La utilización de los recursos provenientes del IDH, distribuidos y asignados en el presente Decreto Supremo, será objeto de control y fiscalización respecto de su utilización de acuerdo a lo dispuesto en las Leyes N° 1178, N° 2028, N° 2042, N° 2246 y los Decretos Supremos Reglamentarios correspondientes.
Los beneficiarios presentarán de acuerdo a normativa legal vigente, Estados Financieros auditados sobre la ejecución de los recursos institucionales y auditorias operativas sobre el cumplimiento de sus Programas Operativos Anuales, con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del IDH.

3. Congelamiento de cuentas. En caso de que los beneficiarios no cumplan lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral precedente, en los plazos y modalidades establecidas, el Ministerio de Hacienda procederá al congelamiento de todas las cuentas que reciben recursos por coparticipación, subvención y transferencias del TGN, hasta que se verifique la documentación correspondiente.

El Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH no forma parte de la retención automática diaria del porcentaje aprobado de los impuestos internos con destino al Servicio de Impuestos Nacionales y a la Superintendencia Tributaria, establecidos en la Ley Nº 2166 de 22 de diciembre de 2000 y la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003.

La Administración Tributaria remitirá a conocimiento del Ministerio de Hacienda, un informe con los datos correspondientes a la recaudación del IDH, hasta el diez (10) de cada mes siguiente al que se efectuó la declaración y correspondiente pago”.

ARTÍCULO 3.- (MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 17). Se modifica la definición de “Porcentaje de Participación Contractual” establecida en el Artículo 17 del Decreto Supremo Nº 28223, de la siguiente manera:

“Porcentaje de Participación Contractual.- Es el porcentaje de las ventas reales sobre el total de la producción comercializada que corresponde a la o a las empresas que conforman el Titular de un Contrato Petrolero, y a YPFB, cuando sea parte del contrato. La sumatoria de los porcentajes debe necesariamente ser igual al cien por ciento”.
ARTÍCULO 4.- (CONSENSO). En el caso de que las Universidades Públicas de un Departamento, en el plazo de diez días no se hubieran puesto de acuerdo en los porcentajes de distribución que les corresponde por la asignación de los recursos del IDH, el Tesoro General de la Nación procederá a distribuir el 50% en forma lineal entre las universidades existentes y el restante 50% lo abonará en una cuenta habilitada para el efecto, hasta que exista consenso sobre la distribución mencionada.

ARTÍCULO 5.- (PRIORIZACIÓN). Cada beneficiario priorizará la utilización de los recursos IDH en las competencias descritas anteriormente, elaborando programas y proyectos específicos en el marco de los Planes de Desarrollo o institucionales, desde la publicación del presente Decreto Supremo hasta el 31 de diciembre del 2005, los cuales serán verificados por el Ministerio de Hacienda.

ARTÍCULO 6.- (VIGENCIA DE NORMAS).

I. Se abroga el Decreto Supremo Nº 28333 de 12 de septiembre de 2005.

II. Se abrogan y derogan todas las Disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.

El Señor Ministro de Estado en el Despacho de Hacienda queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil cinco.